Datos del Expediente

Carátula: MOLINARI JULIETA Y OTRO C/ FREIJOMIL MIGUEL ANGEL S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS

Fecha inicio: 26/08/2019

N° de Receptoría: D - 9313 - 0

N° de Expediente: 168469

Estado: En Letra - Espera Cédulas

REFERENCIAS

Sentencia - Folio: 1804

Sentencia - Nro. de Registro: 340

26/12/2019 - SENTENCIA DEFINITIVA

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

REGISTRADA BAJO EL N° 340-S F° 1804/10

Expediente n° 168.469– Juzgado n°2

En la ciudad de Mar del Plata a los 26 días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “**MOLINARI, Julieta y Otro c. FREIJOMIL. Miguel Ángel s. Daños y perjuicios**”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

1) ¿Es justa la sentencia apelada?

2) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

I: En la sentencia que obra a fs. 1225/1257, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por Julieta Molinari y condenó a Miguel Ángel Freijomil y Marcela Claudia Paleo, juntamente con la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. - esta última en la medida del seguro - a pagar a los actores la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos veintidós con cuarenta centavos (\$ 477.722,40, con más intereses y costas.

Para decidir del modo en que lo hizo, el Sr. Juez consideró que el accidente que le costó la vida al Sr. Desiderio Pablo Luengo fue ocasionado por la “culpa concurrente” de la víctima y de Miguel Angel Freijomil, conductor del Fiat Duna que embistió al vehículo Renault Express conducido por el infortunado Luengo.

Descartó que la víctima hubiera cruzado la doble línea amarilla, pese a lo cual estimó igualmente que la maniobra de sobrepaso resultó riesgosa y contraria al art. 52 de la ley 11.430 por entonces vigente, a lo que adicionó que Luengo presentaba 0,38 gr./litro de alcohol en sangre, y que conforme la pericia médica presentada por la parte demandada ello implica que al momento del hecho su dosaje alcohólico se elevaba a 0,938 grs./litro, por encima de los 0,500 grs. tolerados por el art. 93 de la misma ley de tránsito, y que además circulaba a 90 kms. superando la velocidad permitida de 80 km. por hora en ese lugar.

Con tales fundamentos atribuyó la responsabilidad en un 80% a Luengo y en un 20% al demandado.

Apelaron las partes, y los recursos que les fueron concedidos libremente, han sido fundados y respondidos.

II: Los agravios de la parte actora se circunscriben a la atribución de la autoría y responsabilidad hecha en la sentencia, pidiendo que se revoque y se endilgue al demandado la autoría exclusiva del ilícito, o eventualmente asignando un porcentaje de responsabilidad “sensiblemente superior”.

Para ello el apelante analiza las infracciones imputadas a la víctima y señala que:

a) Luengo no realizó ninguna “maniobra riesgosa”, pues ni siquiera maniobró, limitándose a continuar por el carril por el que circulaba, y quien sí realizó una maniobra peligrosa fue el demandado al correrse a la banquina, ceder el paso y volver sobre sus pasos en un riesgoso “zigzag” que fue causa adecuada de la embestida contra el automotor de Luengo.

El apelante considera que el sobrepaso prohibido es el que se hace por el carril opuesto, no el que intentó Luengo habilitado por el desplazamiento voluntario de Freijomil.

b) Considera que la referencia al alcohol en sangre de Luengo es doblemente errada, tanto porque el hallazgo fue en realidad de 0,38 gramos por litro (dentro del límite de 0,500 tolerado) y la pretensión de elevarlo a 0,79 se basa en especulaciones de un informe privado agregado al responder la demanda, que fue oportunamente impugnado por pretender sustituir la prueba pericial oficial (desistida por la demandada), como porque no se señala en la sentencia cual fue la influencia causal de esa infracción, toda vez que Luengo no cometió falta alguna (nunca dejó de circular por su carril y su vehículo no fue el embistente).

c) Una crítica similar dirige contra el presunto exceso de velocidad, advirtiendo que no se ha indicado de qué modo pudo haber influido ese pequeño exceso en el resultado, para a continuación recordar que no hubo acuerdo entre los técnicos respecto a la velocidad que llevaba el vehículo conducido por la víctima, ya que en la causa penal se le asigna 62,5 kms. por hora.

Destaca que la causa generadora del hecho dañoso fue, esencialmente, la maniobra de Freijomil quien luego de ceder el paso, volvió en zigzag sobre el carril embistiendo al Renault de Luengo, y por ello se le debe asignar el 100% de la responsabilidad.

III: Los agravios de la demandada son los siguientes:

a) Se agravia de la responsabilidad que le fue adjudicada en un 20%, considerando que el actor venía a “gran velocidad”, que portaba un nivel de alcohol en sangre mayor al

permitido, y que intentó realizar una maniobra prohibida, y que no se ha probado la calidad de embistente de Freijomil. Para sustentar este argumento analiza la pericia del Ing. Agüero.

b) En segundo lugar se agravia de la tasa de interés, pidiendo que se aplique la solución que la SCBA ha establecido en “Vera” y en “Nidera”.

IV: Exclusivamente en lo que hace a la atribución de la autoría y responsabilidad, entiendo que debe rechazarse el recurso de la demandada y admitir parcialmente el de la parte actora.

a) Aunque se trate de un esquema conocido, es necesario recordar que la responsabilidad fundada en un factor objetivo de atribución, presume la autoría del dueño o guardián de la cosa riesgosa, siempre y cuando se haya demostrado la intervención activa de la cosa riesgosa (Zavala de González, Matilde “El proceso de daños” tº3, p.211).

A la parte actora le basta probar que el contacto con la cosa riesgosa fue la causa del daño, lo que normalmente sucede con la prueba del hecho mismo (Zavala de González ob.cit.p.208), y es en consecuencia la parte demandada quien debió probar la ruptura del nexo adecuado de causalidad.

A diferencia de la interpretación que hace la parte demandada en su recurso, me parece suficientemente acreditado que Freijomil embistió con el Fiat Duna al utilitario que manejaba Luengo, por lo que considero demostrada la intervención activa del automotor conducido por el demandado.

La mecánica del hecho surge – como lo indica el Sr. Juez a fs.1236 d.1- de la apreciación conjunta de las declaraciones del propio Freijomil en sede penal (copias a fs.543/44) en cuanto relata que se corrió hacia la banquina para dejar paso al vehículo que vio venir, la pericia mecánica oficial del Ingeniero Luis Agüero, en cuanto asevera que la hipótesis del demandado es falsa (fs. 883 vta.) y cierta aquella en que el Fiat embiste a la Renault Express (fs. 884), sin perjuicio de que luego (fs. 884 vta.) la estime solo como “muy probable”.

b) “Cuando la ley presume la relación causal, la prueba de los eximentes debe ser inequívoca” (Zavala de González, Matilde “El Proceso de daños” en la colección “Resarcimiento de daños” tº 3 p.213, Hammurabi, Bs.As.1993), en tanto y “acorde con una orientación jurisprudencial aquiescente, cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y el demandado debe acreditar la intervención de una causa ajena, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto...” (autora y obra citadas p.214; esta Sala II causa nº 138.041,152.339 entre otras; Pizarro , Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por riesgo creado y de empresa” edit.La Ley tº 1 p. 276, Bs.As. 2006).

En igual sentido la doctrina legal de la SCBA (acuerdo del 14.10.86 nº 33.743, DJBA 132-229), al decir que “los impedimentos de responsabilidad, deben ser apreciados restrictivamente, por la finalidad social típica de la norma, que ha creado factores de atribución, que deben cesar solo en casos excepcionales, sin conferirles desmedida extensión”.

La prueba de la ruptura o desviación de la relación causal, exige la demostración de que los efectos de una causa determinada (en el caso, la embestida de Freijomil a Luengo), pueden ser desviados, o directamente suprimidos, por otra causa distinta y coexistente (concausa) (en el caso las infracciones de tránsito atribuidas a Luengo) (Alterini, Atilio A “Responsabilidad civil: Límites de la reparación civil”, Abeledo-Perrot Bs.As.1979 p.140 nº173 con cita de Ricardo Nuñez).

De allí que – a mi juicio- no quepa “presumir” la culpa o la conducta interruptiva de la víctima, sino que ésta deba ser adecuadamente demostrada, mediante prueba acabada, severamente apreciada, restrictivamente interpretada, como vimos, y que tratándose de una cuestión abarcada íntegramente por un factor objetivo como el riesgo recíproco, no parezca adecuado encuadrarla como “culpa concurrente”, sino que – en su caso- se trataría de un supuesto de causación exclusiva o concurrente (SCBA, Ac. 33155, 8/4/86, "Sacaba de Larosa", A. y S. 1986-I-524, LL 1986-D-479 con de Félix A. Trigo Represas, "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores" Corte Sup., 22/12/87, "Empresa Nacional de Telecomunicaciones v. Prov. de Bs. As.", LL 1988-D-296 con nota elogiosa de Atilio A. Alterini, "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores" y ED 128-281).

c) La demandada pretende que las infracciones atribuidas a la víctima son suficientes para eximir totalmente de responsabilidad a sus representados, pues el hecho se debió exclusivamente a la conducta de la víctima. No comparto ese punto de vista.

Entiendo que la suma de infracciones puede generar la apariencia de un origen causal distinto a la maniobra de adelantamiento, pero es necesario demostrarlas acabadamente. Debe haber certeza plena de su existencia, y una vez alcanzada esa seguridad se las debe vincular - clara y concretamente - al resultado dañoso ocurrido.

No basta decir que la víctima circulaba excediendo en 10 kms .por hora la velocidad permitida, o que se infiere que al momento del hecho tenía un exceso de alcohol en sangre, sino se demuestra de qué modo esas conductas que infringieron la ley, influyeron o provocaron el hecho. Para que se releve total o parcialmente de responsabilidad al accionado, este debe probar que la víctima provocó en cierto medida el daño (Goldemberg, Isidoro "La relación de causalidad en la responsabilidad civil" editorial Astrea p. 145; 9.163, 164 y nota 294 al pie; del mismo autor: "La aptitud causal de una infracción de normas de estacionamiento en el acaecimiento del daño. Reflexiones a propósito de un fallo", JA 1994-IV-857 esta Sala causa nº 140.511).

d) La velocidad hipotéticamente determinada por el Sr. Perito Ingeniero era de aproximadamente 90 km. por hora (fs. 886), cuando la tolerada era de 80.

No sabemos, porque no lo aclara el Sr. Perito, si ese exceso de 10 kms. por hora es el mismo que describe como “incremento de velocidad provocado por el impacto recibido proveniente del auto que conducía Freijomil” (fs. 884 vta. tercer párrafo), y tratándose de una infracción mínima, la referencia pericial a un incremento de velocidad producido por la embestida (pericia a fs. 884 3er.p.) pone en duda la existencia del ilícito.

Pero, además y si eventualmente hubiera certeza respecto a que el vehículo de Luengo ya venía circulando a 90 kms. antes del choque, nada se ha probado sobre la influencia causal de esos 10 kms. de exceso, y como venimos viendo, la demandada es quien debió acreditar que esa velocidad era pre-existente , y desarrolló su propio curso causal independiente de la condición puesta por Freijomil (haber embestido desde la derecha el utilitario guiado por Luengo).

Con mayor razón aún sería necesaria una prueba estricta si - como en el recurso de la accionada – lo que se pretende es que las infracciones desarrollaron su propio curso causal, excluyendo no ya parcialmente, sino “totalmente” el efecto de la embestida de Freijomil.

La demandada no requirió que el perito informe sobre este punto, y ya vimos que estaba a su cargo la demostración acabada de las desviaciones al curso causal regular que la ley presume, por lo que entiendo que no cabe conjeturar que ese “pequeño exceso” haya tenido suficiente relevancia.

Es más, como explica Jorge Galdós en un destacado antecedente en materia de accidentes de tránsito **“Esa velocidad, aunque ligeramente superior a la permitida no opera a modo de concausa**, la que se configura, dice la doctrina, “cuando el resultado se ha debido... a la interferencia de otro nexa causal independiente... que le ha impuesto sus propias características al proceso causal...” (Núñez, Ricardo, “Derecho Penal Argentino”, t. I, ps. 271/5)” (su voto en Cam. CyC Azul.”Alvarez c.Pianta” JA 1997-II-183, con nota aprobatoria de Isidoro Goldenberg).

“La concausa se agrega a la causa puesta por el agente actuando de “modo inmediato o mediato en la dirección del daño dado por el hecho de aquél” (Busso, Eduardo, “Código Civil Anotado...”, t. III, “Obligaciones. El vínculo”, p. 407). Dice Goldenberg, con abundante cita del derecho judicial, que media cocausación si un suceso “posee una operatividad completamente autónoma de la primera causa” y tal como prevalecientemente lo ha receptado la jurisprudencia (aut. cit., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 185/87, nota n. 343 y reenvíos). Agrega que la incidencia de otra causa independiente que se acopla al hecho primitivo, puede desviar o excluir los efectos regulares de él” (aut. y ob. cit., p. 185)” (del voto del Dr. Jorge Galdós cit.).

Parafraseando al Juez Galdós puede decirse que “el exceso de velocidad de Luengo parece subsumirse en la entidad y gravedad del retorno a la mano y la **embestida protagonizados por Freijomil**.

e) En mi opinión, la alcoholemia tampoco puede considerarse probada – en el grado pretendido - mediante una prueba documental elaborada por un informe médico de la parte demandada, que del grado constatado (0,39) infiere uno superior (0,79) al momento del hecho.

El grado de alcohol en sangre superior a 0,500 mg debe ser el encontrado en el conductor al momento de tomar la muestra (y en el caso no lo fue) pues el carácter sancionatorio del art. 93 de la ley 11.430 impide que la comprobación de la falta se realice mediante el sistema propuesto por el muy respetado consultor de la demandada, quien por otra parte, en el mismo informe advierte acerca de distinta metabolización de las personas en razón del estado de su función hepática (fs. 617) y de su condición de bebedor “abusador” o normal, pues en el primero la tasa de disminución del alcohol en sangre es mayor (primer párrafo fs. 617).

Esas diferencias son las que han llevado a la SCBA a afirmar que “no puede soslayarse que existe una variación de los efectos que produce el alcohol según la mayor o menor tolerancia de cada sujeto” (SCBA Ac. 87.541 voto del Dr.Soria con la mayoría), y como la culpa (de la víctima en este caso) se aprecia en las concretas circunstancias de personas, tiempo y lugar (art.512 Cód.Civil; art.1724 CCyC), y desconocemos cualquier referencia relativa a la condición de bebedor de Luengo, ignoramos también la posibilidad de que el alcohol se metabolice más rápida o más lentamente.

El sistema propuesto por el Dr. Mario Arzeno es posible utilizarlo cuando ha sido pactado como condición (por ejemplo: en el contrato de seguro), pero a los efectos de adjudicarle al conductor

una falta de tránsito, la ley no lo contempla, y no parece admisible crear judicialmente condiciones distintas de aquellas expresamente previstas en la ley para sancionarlo.

Finalmente, la prevalencia de la pericia oficial por sobre la opinión del profesional que solo asesora y defiende el interés de la parte, es constante en la doctrina judicial, (Cám A CC de Quilmes 10788 RSD-83-8 S 25/11/2008, esta sala II causas 158.384; 159.096), y en estos autos la demandada desistió de esa pericia (fs. 1124) ofrecida específicamente con tal fin (fs. 633 in fine).

f) Si bien es posible dudar, al menos, de la influencia causal de las dos faltas anteriormente tratadas, entiendo que el carácter riesgoso de la maniobra constituye una concausa insoslayable.

La maniobra de “adelantamiento” en la ruta es de por sí peligrosa, aún si hubiera sido realizada con todos los cuidados exigibles.

El adelantamiento en el mismo carril, o “en la propia mano”, como lo llama Beatriz Areán (“Juicio por accidentes de tránsito”, Hammurabi, Bs.As.2006, t ^o2 p.347), que el actor apelante reivindica para excluir el cruce de la doble línea amarilla, es un caso de mayor riesgo conforme doctrina y jurisprudencia (ver ob. y autora citados).

La conducta que prescribe la ley de tránsito es la de abstenerse de adelantar en tales condiciones, y la colisión se produjo durante el adelantamiento riesgoso y prohibido, por lo que es evidente que aislada y de por sí, la maniobra constituye una causa autónoma que permite atribuir parcialmente la causación a la víctima que conducía.

g) El análisis de estas circunstancias en las que se produjo el accidente, me lleva a proponer una modificación sobre este aspecto de la sentencia, a fin de que se distribuya la autoría y responsabilidad del hecho en un 50% a la demandada y en un 50% a la víctima.

En consecuencia deben modificarse los montos de capital fijados para reparar los distintos daños del siguiente modo:

i. La suma destinada a reparar el daño designado como “pérdida de la vida humana” a favor de Julieta Molinari por los gastos de Desiderio Joaquín Luengo, fue calculada a fs. 1246 en un total de \$ 382.752, habiéndose fijado en \$ 76.550,40 correspondientes al 20% de autoría asignado. La modificación al 50% importa llevar la suma por el rubro a pesos ciento noventa y un mil trescientos setenta y seis (**\$ 191.376**).

ii. Lo mismo sucede con relación a la suma de \$ 255.172 fijados para indemnizar el mismo daño causado a Julieta Molinari, que parte de un total de \$ 1.275.860 (fs. 1248) por lo que el 50% equivale a pesos seiscientos treinta y siete mil novecientos treinta (**\$ 637.930**).

iii. Corresponde también modificar las sumas estimadas para la reparación del daño moral, fijándola en pesos doscientos mil (\$ 200.000) para Desiderio Joaquín Luengo y pesos noventa mil (\$ 90.000) para Julieta Molinari (fs. 1250 vta y 1255 vta.).

En consecuencia el capital de condena queda establecido en la suma de pesos un millón ciento diecinueve mil trescientos seis (\$ 1.119.306), de los cuales doscientos mil (\$ 200.000) se fijaron a favor de Desiderio Pablo Luengo, y pesos novecientos diecinueve mil trescientos seis (\$ 919.306) corresponden a Julieta Molinari.

V: Desestimado el recurso de la demandada en lo que hace a sus agravios respecto a la atribución de autoría y responsabilidad, considero que le asiste parcialmente razón en relación a sus quejas sobre la tasa de interés fijada.

a) Desde el cambio en la doctrina legal de la SCBA registrado en los causas "Vera, Juan c. Provincia de Buenos Aires" n° 120.536 del 18.4.2018 y "Nidera SA c. Provincia de Buenos Aires", n°121.134, del 3.5.2018, este Tribunal ha ajustado su decisión a los precedentes mencionados (causas "Taddey Vanesa c. Maciel Eduardo y otro s. Daños y perjuicios", y "Cerizola Dante Oscar c. Maciel Eduardo y otro s. Daños y perjuicios", del 4 de junio de 2018 (exped. n°165.213 y 165.1214), "Henestrosa Etelvina c. Amendolara Alejandro F. y otros s. Daños y perjuicios", del 14 de junio de 2018 (exped. n°165.269)).

Allí se estableció por mayoría que "cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual..., en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito", para luego establecer la alícuota en el 6% anual.

Es que la adopción de los valores más cercanos a la sentencia atiende al carácter de "deuda de valor" de la reparación del daño, y como tal consiste en cantidades determinables a ese momento o al más inmediato anterior, pero también la tasa de interés "nominal"... "contiene una fuerte previsión por depreciación de la moneda" (Villegas y Schujman "Intereses y Tasas" Abeledo-Perrot Bs.As.1991 p. 103) con lo que la incidencia del mayor valor se incorporaría dos veces.

Dicho de otro modo: la aplicación simultánea a un mismo crédito del valor "actual" (por el más cercano a la sentencia) del capital y el accesorio a una tasa "nominal", en palabras de la mayoría de la SCBA, "conduce a un resultado desproporcionado, que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial" (considerando II.3.e.i.i.i causa "Vera").

De allí que la Corte Provincial haya decidido aplicar la tasa pura hasta "el momento tenido en cuenta para la determinación de la deuda", pues de aplicarse una tasa nominal - "incidida por la inflación" (Alterini, A.A. "La tasa de interés en la recomposición de la deuda dineraria" en Temas de responsabilidad civil edit. Ciudad Argentina, Bs.As.1995, p.143) - se estaría computando el valor "actual" y también esa previsión que toma en cuenta el mayor valor de los bienes frente al signo monetario.

b) La indemnización del daño calificado como "pérdida de la vida humana", ha sido fijada tomando en cuenta que el salario mínimo, vital y móvil era de \$ 8.860 a la época de la sentencia, por lo que "el momento tenido en cuenta para la determinación de la deuda" es aquel en comenzó tener vigencia la suma de \$ 8.860 como salario mínimo, vital y móvil, y esto sucedió el 1º de julio de 2017.

Por ello es que sobre las sumas de pesos \$ **191.376** y \$ **637.930** los intereses que correrán desde la fecha del hecho (fs. 1255 in fine; 27.5.1999) hasta el 1.7.2017 serán del 6% anual, y a

partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, causa C. 119.176, "Cabrera", sent. del 15-6-2016).

c) No sucede lo mismo con las indemnizaciones por daño moral fijadas en las sumas de pesos doscientos mil y noventa mil para Desiderio Joaquín Luengo y Julieta Molinari respectivamente. No hay ningún dato ni indicio que permita suponer que el Sr. juez avalúo las reparaciones conforme valores al momento de la sentencia, o que no lo hizo a valores históricos.

En consecuencia los intereses sobre estas sumas corren a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (fs. 1256 del fallo de primera instancia).

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión el Sr. juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

Corresponde: **I.** Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y distribuir la autoría y responsabilidad en un 50% a la víctima y en un 50% a los demandados. **II:** Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte demandada y establecer que con respecto a la condena por las sumas de \$ 191.376 y \$ 637.930 los intereses que correrán desde la fecha del hecho (fs. 1255 in fine; 27.5.1999) hasta el 1.7.2017 serán del 6% anual, y a partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires. **III:** Propongo que las costas en ambas instancias se establezcan en un 50% a cargo de Julieta Molinari y en un 50% a los demandados (arts. 71 y 274 del CPC) y que se difiera la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

SENTENCIA

Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: **I)** Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y se modifica la sentencia distribuyendo la autoría y responsabilidad en un 50% a la víctima y en un 50% a los demandados. **II:** Se hace lugar parcialmente al recurso de la parte demandada y se establece que con respecto a la condena por las sumas de \$ 191.376 y \$ 637.930 los intereses que correrán desde la fecha del hecho hasta el 1.7.2017 serán del 6% anual, y a partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires. **III:** Las costas en ambas instancias se establecen en un 50% a cargo de Julieta Molinari y en un 50% a los demandados (arts. 71 y 274 del CPC) y se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.

Roberto Loustaunau Ricardo D. Monterisi

Lucas M. Trobo

Auxiliar Letrado

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----

[Volver al expediente](#) [Imprimir](#) ^